



Roj: **STSJ CAT 6995/2020 - ECLI:ES:Tsjcat:2020:6995**

Id Cendoj: **08019340012020103537**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social**

Sede: **Barcelona**

Sección: **1**

Fecha: **23/07/2020**

Nº de Recurso: **184/2020**

Nº de Resolución: **3602/2020**

Procedimiento: **Recurso de suplicación**

Ponente: **JOAN AGUSTI MARAGALL**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 34 - 4 - 2020 - 0000285

EL

Recurs de Suplicació: 184/2020

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

IL·LM. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS

IL·LM. SR. JOAN AGUSTI MARAGALL

Barcelona, 23 de juliol de 2020

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 3602/2020

En el recurs de suplicació interposat per ROSTO, S.A. i GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN, S.L. a la sentència del Jutjat Social 9 Barcelona de data 16 de setembre de 2019 dictada en el procediment núm. 317/2017, en el qual s'ha recorregut contra la part Felicísimo , Matilde i LA LUZ RESTAURANT&CLUB LLC, ha actuat com a ponent l'Il·lm. Sr. Joan Agustí Maragall.

ANTECEDENTS DE FET

Primer. En data 6 d'abril de 2020 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre reclamació quantitat, la qual l'actor al·lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 16 de setembre de 2019, que contenia la decisió següent:

"Que estimando parcialmente la demanda promovida por D. Felicísimo y Matilde contra GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN, S.L., ROSTO, S.A., LA LUZ RESTAURANT & CLUB LLC, debo condenar a las empresas demandadas a abonar solidariamente a la parte actora Sr. Felicísimo 6033,56 euros y a la Sra. Matilde 2935,25 euros, cantidades que se verán incrementada en el 10 % por mora en el pago desde la fecha de su devengo hasta la fecha de la presente Sentencia .

Que procede absolver al Fondo de Garantía Salarial como responsable principal, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria caso de insolvencia de la empresa."



Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

" 1º.- La parte demandante Felicísimo suscribió un contrato temporal de obra y servicio determinado , que se da aquí por reproducido con ROSTO SA en fecha de 28 de septiembre de 2015 para prestar servicios como segundo de cocina en el restaurante Tragaluz sito en Passatge de la Concepció 5 de Barcelona . Su jefe de cocina era el Sr. Pascual quien en diciembre de 2015 le propuso ir a prestar servicios para el Grupo Tragaluz en Dubai . El demandante dijo que le interesaba si podía ir su pareja la codemandante Sra. Matilde . En fecha de 10 de enero de 2016 el Sr. Felicísimo fue dado de baja de ROSTO SA por fin de contrato temporal .

El 10 de febrero de 2016 los demandantes volaron a Dubai e iniciaron en fecha de 1 de marzo de 2016 la prestación de servicios en el restaurante LALUZ RESTAURANT AND CLUB LLC sito en Dubai, D. Felicísimo como subchef con una retribución de 3700 euros mensuales y la Sra. Matilde como barman con una retribución de 1800 euros mensuales brutos con inclusión de las pagas extraordinarias.

(Documental de la parte demandante y de la parte demandada y testifical del Sr. Jose Miguel).

2º.- En fecha de 7 de febrero de 2016 les remitieron por correo electrónico, desde una dirección del grupotragaluz.com, los contratos de trabajo con LALUZ RESTAURANTE basado en la Ley de Emiratos Árabes Unidos y que se dan aquí por reproducidos. Los firmaron en Barcelona y los remitieron por correo electrónico. El viaje a Dubai se llevó a cabo en fecha de 10 de febrero de 2016. La contratación de los actores se realizó en España y la gestión de los visados, billetes de avión para ir a Dubai se gestionó por personal del Grupo Tragaluz. En el documento 17 de la parte actora que se da aquí por reproducido consta que el restaurante de Dubái es un proyecto del Grupo Tragaluz y que aunque los trabajadores no serán desplazados hasta el 10 de febrero de 2016 cobrarán el salario desde el 1 de febrero de 2016. (Documental de la parte demandante y de la parte demandada).

3º.- En fecha de 5 de junio de 2016 los demandantes comunicaron su dimisión con efectos de 5 de julio de 2016. (Documental de la parte demandante y de la parte demandada).

4º.- La empresa demandada adeuda al Sr. Felicísimo , 3700 euros en concepto del salario del mes de junio de 2016, 616,67 euros en concepto del salario del mes de julio de 2016 y 1716,89 euros en concepto de devengadas y no disfrutadas . Todo ello asciende a la suma de 6033,56 euros.

La empresa demandada adeuda a la Sra. Matilde 1800 euros en concepto del salario del mes de junio de 2016, 300 euros en concepto del salario del mes de julio de 2016, 835,25 euros en concepto de vacaciones devengadas y no disfrutadas . Todo ello asciende a la suma de 2935,25 euros.

Se dan aquí por reproducidas las nóminas aportadas por la parte actora . (Documental de la parte demandante y de la parte demandada).

5º.- GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN SOCIEDAD LIMITADA está domiciliada en calle Mallorca 273 entresuelo de Barcelona , se constituyó el día 14 de mayo de 2003 , tiene como objeto social la tenencia e inversión en participaciones y acciones de todas sociedades con la finalidad de dirigir y gestionar tales participaciones así como dirigir e intervenir en la gestión , dirección y administración de las sociedades participadas , mediante la prestación de apoyo a su gestión . Sus socios son ROSTO SA , Herminia Y NEGELE SL . Su administrador solidario es Anselmo .

ROSTO SA , sita en Pasaje de la Concepción 5 2º1º tenía como propietarios a Herminia , Anselmo y Carlos . La administradora única de ROSTO SA es Herminia y el socio único actual es la mercantil DINAMICO ESTEVA SL . Su director ejecutivo es Anselmo . Tiene como objeto social la explotación de bares y restaurantes. Se da aquí por reproducido el contrato de prestación de servicios entre ROSTO SA y GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN SL de 15 de junio de 2004. En el mismo se establece que GTG SL prestará a ROSTO SA los servicios de RRHH, compras, dirección de cocina, mantenimiento informático, transporte y compras, imagen corporativa, dirección y administración y contabilidad . Que GTG SL no persigue beneficio alguno derivado del ejercicio de su actividad limitándose a repercutir a ROSTO los gastos que se generan por el concepto de prestación de servicios. La repercusión de los gastos se calculará en función de la utilización de ROSTO de los servicios prestados por GTG SL y que de común acuerdo es aceptado por ambas partes. Se da aquí por reproducido el contrato entre GTG SL, con domicilio en calle Mallorca 273 entresuelo de Barcelona y LUZTRAGALUZ SL con domicilio social en calle Mallorca 273 entresuelo de Barcelona , de 1 de junio de 2015 y el contrato suscrito entre LUZTRAGALUZ SL, con domicilio en Calle Mallorca 273 entresuelo de Barcelona, y D. Herminio Y Humberto , en virtud del cual crearon una sociedad de responsabilidad limitada bajo el nombre de TRAGALUZ FACILITY MANAGEMENT LLC en adelante LLC en los EAU que gestionará el RESTAURANTE TRAGALUZ EN LOS EAU . En el mismo consta que LLC es el inquilino del restaurante y ha firmado el contrato de arrendamiento del restaurante, LALUZ proveerá un plan para la operación del restaurante incluyendo los requerimientos de personal . Durante el periodo de vigencia el restaurante DUBAI TRAGALUZ RESTAURANTE figurará en todas las pertinentes en todo



el sito del licenciante grupotragaluz.com como restaurante de la cadena TRAGALUZ RESTAURANTS . En las obligaciones post terminación consta " el licenciario debe cesar inmediatamente de operar el restaurante como un restaurante tragaluz " RESTAURANTE AVLI Y CLUB LLC es una empresa de responsabilidad limitada constituida el 19 de enero de 2016, cuyo gerente es Pascual . En anteriores propietarios consta LALUZ hasta 16 de octubre de 2017 cuyos socios era PALMTREE PROPERTY LIMITED RESTAURANTE LALUZ Y CLUB LLC . (Documental de la parte demandante y de la parte demandada)

6º.- D. Cecilia es responsable de RRHH del GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN y apoderada de ROSTO SA . Pascual era asesor gastronómico del Grupo Tragaluz . Se le contrató para el proyecto en Dubai y los meses previos a la apertura del restaurante de Dubai , mientras no les concedían la licencia en EAU, estuvo trabajando en el restaurante TRAGALUZ propiedad de ROSTO SA.

Romulo era el director de operaciones en Dubai y los meses previos a la apertura del restaurante de Dubai estuvo trabajando en el restaurante TRAGALUZ. (Testifical Sr. Jose Miguel y documental de ambas partes)

7º.- Se dan aquí por reproducidas las ofertas de trabajo en Dubai del grupo Tragaluz de diciembre de 2015 y enero de 2016. Se dan aquí por reproducidos los correos electrónicos aportados por la parte actora . (Documental de la parte actora)

8º.- En fecha de 13 de mayo de 2016 se publicó en la página web del Hotel Omm del Grupo Tragaluz que " Laluz el nuevo restaurante de Dubai del Grupo Tragaluz ya está abierto. Se trata de un nuevo proyecto del grupo (...) cuenta con un equipo de 22 personas todas ellas formadas por el Grupo Tragaluz en Barcelona ". En la página web del Grupo Tragaluz se anunció que el 29 de abril de 2016 han abierto en Dubai. (Documental de la parte actora)

9º.- Se intentó la conciliación sin avenencia. "

Tercer. Contra aquesta sentència les parts demandades Rosto, S.A i Grupo Tragaluz Gestion, S.L. van interposar un recurs de suplicació, que van formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i ambdós recursos van ser impugnats per la part actora . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- La sentència d'instància condemnà les tres demandades, solidàriament, a l'abonament als demandants des imports de 6.033,56€ i 2935,25€, més el 10% d'interès, en concepte de diferències salarials.

Contra la mateixa interposen recurs de suplicació dues de les societats codemandades, recurs en gran part coincident, que ha estat impugnat pels demandants.

SEGON.- Per mitjà dels sis primers motius formulats per ROSTO, SA (als que s'ha adherit la defensa de GRUPO TRAGALUZ GESTION SL, que també postula una revisió estrictament pròpia), i en base a l'apartat b) de l' art. 193 LRJS, postulen ambdues recurrents la revisió de diversos fets provats i l'adició de diversos fets provats nous.

Abans d'abordar aquesta pretensió escau recordar que és doctrina consolidada i pacífica que per a que la revisió dels fets provats pugui ser atesa és precís que concorrin una sèrie d'elements " *sine qua non*", a saber: a) que es determinin amb precisió i claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat respecte dels elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) que s'ofereixi al tribunal ad quem un redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous; c) que es citin en forma concreta els documents o les perícies respecte les què es faci evident l'error del jutgador "a quo", sense que sigui acceptable una invocació genèrica o una revisió de fets no discutits al llarg de les actuacions; d) que aquests documents o perícies posin en evidència l'error o omisió d'aquest jutgador de forma clara, evident, directa i palesa, sense necessitat de conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques, naturals i/o raonables; i e) que la revisió que es pretén sigui transcendent en quant la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria.

D'altra banda, el recurs de suplicació, per la seva naturalesa extraordinària en l'àmbit laboral -on no impera la doble instància- comporta que la interposició del mateix no signifiqui una nova valoració dels elements jurídics i fàctics concurrents -a diferència de l'apel·lació-, sinó -per raons d'immediatesa, imbricades en l' art. 24.1 en relació amb el 35.1 CE- una constatació d'un error processal, fàctic o d'aplicació del Dret. No és factible, per tant, una nova valoració dels fets concurrents, sinó una objectivització dels elements probatoris que palesin -sense dubtes, en forma fefaent i incontrovertible- un error en la valoració de la prova.



Recordats aquests criteris doctrinals, abordem a en primer lloc. les revisions fàctiques postulades per ROSTO,SA, a les que s'adhereix i es remet GRUPO TRAGALUZ GESTION SL en el seu recurs:

- *Fet provat segon*: Postulen ambdues recurrents la modificació del fet provat segon a fi que, en essència, s'especifiqui que el que fou remès per correu electrònic foren ofertes de treball (i no contractes de treball), que es van remetre des d'un correu electrònic de LALUZ RESTAURANT & CLUB LLC (i no del grup Tragaluz), que en aquestes ofertes de treball constava com a persona autoritzada determinat soci dubaití de l'esmentada societat, sense que consti acreditat on els demandants signaren les esmentades ofertes (enlloc de referir que fou a Barcelona i que els remeteren per correu electrònic). També es postula la supressió de la darrera afirmació continguda en el fet provat, a partir del darrer punt i seguit (" *En el documento 17 de la parte actora...*").

Aquesta revisió haurà de ser desestimada en tots els seus extrems: el fets recollits en el ordinal segon s'acrediten clarament dels documents núm. 9 a 24 de la part actora (correus electrònics creuats entre els actors i responsables del Grup Tragaluz respecte a la seva contractació a càrrec de directius del Grup Tragaluz, la gestió dels viatges i els visats per part dels mateixos, i la integració del Restaurant la La Luz en l'esmentat grup), i reflecteixen la realitat del procés de contractació i del treball al restaurant La Luz, plenament insert al Grup Tragaluz, que en el en absolut queden desvirtuats pels documents invocats per les recurrents. En tot cas, d'aquells documents se'n després amb tota claredat -documents 9 al 13- que les inicials ofertes d'ocupació pel restaurant La Luz remeses electrònicament per Romulo, son considerades per l'esmentat Cap d'operacions del Grup Tragaluz com els "contractes de treball" un cop signats i retornats per correu electrònic pels demandants.

- *Addició del fet provat segon bis*:

Postulen les recurrents l'addició d'un nou fet provat, conforme el qual els demandants no haurien aportat els contractes de treball, malgrat haver estat requerits per provisió de data 23.5.19.

La pretensió revisora, en els termes que està formulada, esdevé inacceptable atès que refereix un raonament processal, que no pot integrar la declaració fàctica.

En tot cas, i com ja s'ha raonat anteriorment, dels documents 9 al 13 i de la resta de documentació aportada per la part demandant s'arriba a la conclusió que les inicials ofertes d'ocupació pel restaurant La Luz remeses electrònicament per Romulo, son considerades per l'esmentat Cap d'operacions del Grup Tragaluz com els "contractes de treball" un cop signats i retornats per correu electrònic pels demandants.

- *Fet provat tercer*:

Respecte d'aquest fet, que reflecteix la dimissió dels demandants en data 5.6.16, pretenen els recurrents afegir-hi que la mateixa es refereix a la societat LALUZ RESTAURANT, inclusió que -en els termes que es formula i atès l'objecte de debat- és predeterminant respecte a un dels punts de controvèrsia, per la qual cosa ha de ser desestimada, atès que amb el redactat actual queda prou clar que ambdós demandants dimitiren en la prestació de serveis al Restaurant La Luz de Dubai.

- *Fet provat quart*:

També ha de ser desestimada la revisió referida al fet provat quart de la sentència, que dona per acreditat la realitat dels deutes reclamats pels demandants, mentre que les recurrents postulen precisament el contrari: que no s'acredita de la documental aportada el deute reclamat.

Fonamenta la pretensió revisora en els documents 28 a 35 aportats pels demandants que corresponen als mesos de febrer a maig de 2016, i on hi falten els mesos de juny i juliol, precisament els reclamats com a impagats. Però aquesta alegació no té fonament atès que la càrrega de la prova és de l'empresa conforme hauria pagat efectivament els salaris reclamats, i no a la inversa, com encertadament raona la sentència d'instància al penúltim paràgraf del segon fonament jurídic, raonament de convicció que no ha estat controvertit per les recurrents.

- *Adició del fet provat cinquè bis*:

Postula la recurrent la inclusió d'un nou fet provat que reflectís que la part demandant no ha aportat cap indici de l'existència d'un grup d'empresa de caràcter patològic, a diferència de les codemandades que sí aportaren prova en sentit contrari.

La pretensió revisora, atès el seu caràcter predeterminant, ha de ser rebutjada de pla, sense necessitat de major consideració.

- *Fet provat sisè*.

Denuncien les recurrents un greu error material en aquest fet, consistent en que ni Pascual ni Romulo haurien treballat, prèviament al projecte del restaurant La Luz de Dubai, al restaurant Tragaluz, que -afirmen- no existeix.



També ha de ser desestimada aquesta revisió, perquè ni es justifica la seva rellevància, ni la documentació aportada permet evidenciar el pretès error material que, d'existir, seria irrellevant per a la resolució del plet.

- *Fet provat setè.*

Respecte del fet provat setè, que dona per reproduïdes les ofertes de treball a Dubai i els correus electrònics rebuts al respecte pels demandants, postulen les empreses recurrents que s'especifica que aquelles ofertes eren de LALUZ RESTAURANT & CLUB LLC d'acord amb la Llei d'Emirats Àrabs, i la supressió de la referència als correus electrònics.

Fonamenten aquesta revisió, novament amb els documents núm. 9 al 13 dels aportats pels demandants en els que, certament, hi consta només l'anagrama del restaurant Laluz, però basta passar al documents següents per constatar que els correus electrònics remesos als demandants en motiu de la seva contractació són emesos per directius i empleats des d'adreces de correu electrònic del "grupotragaluz", sense que la mera al·legació conforme aquests correus no foren reconeguts per les demandades els privi d'eficàcia probatòria, en no constar que -en el moment del seu examen, un cop admessa aquesta prova- haguessin impugnat la seva autenticitat, autenticitat respecte de la qual, en tot cas, la magistrada, en us de la seva competència exclusiva, n'ha assolit la plena convicció.

S'ha de desestimar, per tant, aquesta revisió.

- *Fet provat vuitè.*

Postulen les recurrents la modificació del fet provat vuitè, que refereix l'anunci a la plana web de l'Hotel Omm del Grup Tragaluz de l'obertura del restaurant Laluz, com a nou restaurant del grup a Dubai, i la seva substitució per un text que refereixi que respecte de l'esmentat anunci no es practicà prova informàtica que adverés la seva autenticitat, que fou qüestionada en fase de conclusions, i que no es pot tenir per acreditada.

La pretensió revisora s'ha de desestimar de pla, atès el caràcter predeterminant i ubicació inadequada del que text alternatiu postulat, que refereix un raonament de convicció, i en cap cas un fet que es pugui invocar com acreditat. S'ha de recordar, d'altra banda, que no és en fase de conclusions quan escau qüestionar la validesa de la prova documental aportada per la contrapart, sinó en el moment del seu examen, immediatament posterior a la seva aportació.

Tant respecte a aquesta plana web com en relació als correus electrònics, qüestionats a les revisions anteriors, era en el moment de l'examen dels mateixos quan les parts demandades ara recurrents podien qüestionar la seva autenticitat i, si ho consideraven oportú, com encertadament invoca la defensa dels demandants en l'escrit d'impugnació, formular taxa de falsedat documental, que hagués activat -de considerar-ho necessari la magistrada d'instància atesa la rellevància dels documents- la qüestió prejudicial penal prevista a l' art. 86.2 LRJS.

En tot cas, la Sala ha de reiterar la extemporaneïtat de les al·legacions de manca d'autenticitat de documents aportats pels demandants, en ser formulades en fase de conclusions o en el propi recurs de suplicació.

S'ha de desestimar, per tant, aquesta darrera revisió.

-*Addició del fet provat vuitè bis:*

GRUPO TRAGALUZ GESTION SL, a més d'adherir-se a les revisions fàctiques formulades per ROSTO,SA, ja resoltes, en formula una de pròpia, que reflectís que ha quedat acreditat que no existeix grup d'empreses, ni mercantil ni patològic, entre ambdues recurrents, ni entre cada una d'elles i la societat dubaití LALUZ RESTAURANTE & CLUB LLC".

La pretensió revisora, com les anteriors, ha de ser desestimada, en no tenir caràcter fàctic, sinó que integra una valoració i conclusió jurídica, a més de caràcter negatiu.

El fet provat cinquè -no impugnat per cap de les recurrents- reflecteix les dades estrictament fàctiques, en base a les quals la magistrada d'instància, en el fonament jurídic segon i després d'un extens raonament (en el que s'afegeixen altres rellevants afirmacions fàctiques, amb inqüestionable valor de fet provat) que no han estat impugnades per les recurrents, arriba a la conclusió de la realitat del grup d'empreses en el que estan integrades ambdues codemandades. I la impugnació d'aquesta conclusió no es pot canalitzar per mitjà de l'addició fàctica que es postula, que reflectiria la conclusió contrària a l'assolida per la magistrada, sinó per la via de l'apartat c) de l' art. 193 LRJS.

TERCER.- Com a setè motiu del recurs de ROSTO, SA, al que s'adhereix GRUPO TRAGALUZ GESTION SL en el tercer motiu del seu recurs, i per la via de l' art. 193 c) LRJS, denuncien les recurrents la infracció de l' art. 25 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, en no haver declarat l'existència de manca de competència jurisdiccional.



En síntesi, les recurrents, en base a la declaració de fets provats que hauria resultat d'haver prosperat les revisions fàctiques postulades (desestimades en l'anterior fonament jurídic), al·leguen que els demandants no prestaren serveis a Espanya, foren contractats fora del territori espanyol, l'empleadora LALUZ RESTAURANTE & CLUB LLC està domiciliada fora del territori espanyol i no té cap agència o delegació dins del mateix, i que la mateixa té nacionalitat dels Emirats Arabs.

El motiu ha de ser desestimat en fonamentar-se en premisses fàctiques que no es corresponen amb les declarades provades, havent estat desestimades les revisions fàctiques postulades per les recurrents.

La sentència d'instància, al segon fonament jurídic, en extensa argumentació que la Sala ha de compartir plenament, diferencia la empleadora formal -LALUZ RESTAURANTE & CLUB LLC, creada per TRAGALUZ SL- del Grupo Tragaluz, a qui considera l'empleador real. I que el demandant treballava al restaurant TRAGALUZ del carrer Mallorca quan li fou ofert el càrrec de sub-xef del nou restaurant a Dubai, que ell acceptà si es contractava també a la seva parella la codemandant. I que la gestió de la seva contractació es feu des del Grupo Tragaluz.

En base a aquestes premisses fàctiques, escau recordar les fonts normatives que regulen la competència judicial internacional, en els termes establerts a la STS de 16.1.18:

"Interesa recordar, por tanto, las fuentes normativas que regulan la competencia judicial internacional vinculada al contrato de trabajo, sabiendo que si el Derecho de la UE brinda respuesta al problema suscitado ya no debemos acudir a Convenios Internacionales o normas internas.

1. Convenios Internacionales.

El "Convenio de Bruselas" de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil fue durante mucho tiempo la norma de referencia sobre el tema.

Hay que aludir al "Convenio de Lugano" ("Lugano II") de 16 de septiembre de 1988, -DOUE de 21 de diciembre de 2007; BOE de 20 de octubre de 1994- que entró en vigor de forma general el 1 de enero de 1992 y en España el 1 de noviembre de 1994, con el mismo objeto que el de Bruselas e incluyendo igualmente a los países integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC; Reino de Noruega, la Confederación suiza y la República de Islandia).

Interesa ahora advertir que el Reglamento nº 44/2001 (LCEur 2001, 84) asumió su contenido y los convirtió en regulación comunitaria. Pero la conexión entre ambos instrumentos es total. Numerosas resoluciones explican que la jurisprudencia emanada del TJCE y del TJUE sobre las disposiciones del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 será igualmente válida para interpretar, mutatis mutandis ? el Reglamento nº 44/2001 (LCEur 2001, 84) , y por extensión, el Reglamento nº 1215/2012 (LCEur 2012, 2110) , siempre y cuando las disposiciones de dichos instrumentos puedan calificarse de equivalentes; cf. la STJUE 14 septiembre 2017 (PROV 2017, 232111) , C-168/16 , Nogueira.

2. Reglamento CE 44/2001 (LCEur 2001, 84) .

El Reglamento (CE) nº 44/2001 (LCEur 2001, 84) del Consejo, de 22 de diciembre de 2000 ("Bruselas-I"), regula la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Repasemos los preceptos del mismo que poseen relevancia para el caso.

Artículo 2.1: Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado .

Artículo 4.1: Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 .

Artículo 4.2: Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado miembro, podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el anexo I .

Artículo 18.1: En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5 .

Artículo 18.2: cuando un trabajador celebre un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro .



Artículo 19: Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados 1) ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o 2) en otro Estado miembro: a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador .

Artículo 60.1: A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre: a) su sede estatutaria; b) su administración central; c) su centro de actividad principal.

3. Reglamento (UE) nº **1215/2012** (LCEur 2012, 2110) .

El Reglamento (UE) nº **1215/2012** (LCEur 2012, 2110) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil es norma sumamente relevante para la materia ("Bruselas I Bis").

Sin embargo, recordemos que, a tenor del artículo 66, sus disposiciones solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015 y que el Reglamento (CE (RCL 1978, 2836)) nº 44/2001 continuará aplicándose a las resoluciones dictadas a raíz de acciones judiciales ejercitadas antes del 10 de enero de 2015.

En nuestro caso, se trata de determinar la competencia respecto de una demanda por despido presentada el 21 de febrero de 2014. Por ello, aunque el Auto del Juzgado de lo Social declarando la incompetencia de la jurisdicción española se dicta cuando ya despliega sus efectos el Reglamento **1215/2012** (LCEur 2012, 2110) (concretamente, el 9 de febrero de 2015) ha de estarse a la norma precedente.

4. Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578) .

El apartado 1º del artículo 25 LOPJ dispone que, en el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes en materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español.

5. Doctrina relacionada.

La STS 30 diciembre 2013 (RJ 2013, 8369) (rec. 930/2013) alberga un completo recordatorio que conviene resumir acerca de la doctrina sentada sobre estos temas:

No cabe ignorar que el Convenio de Bruselas, de obligada aceptación en su tiempo por todos los Estados que se convertían en miembros de la Comunidad Europea (art. 63 Convenio), ha sido sustituido por el Reglamento (CE) nº 44/2001 (LCEur 2001, 84) , del Consejo.

Con ello las previsiones del Convenio han pasado a integrarse formalmente en el acervo comunitario, en el que ya lo estaban de facto, dado el contenido de sus Disposiciones Finales, que regulan su vinculación y reconocen que el Convenio tiene como base jurídica el art. 220 del Tratado de Roma (RCL 1999, 1205) , y la decisión de sus signatarios, manifestada a través del Protocolo de 29 de noviembre de 1.997, (DOCE de 26-1-98), de establecer que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas fuera competente para interpretarlo.

El Convenio de Bruselas establece un fuero general, único y excluyente: el del domicilio del demandado sito en el territorio de la Comunidad Europea, al que se circunscribe su ámbito espacial. A tal efecto, su art. 2 dispone que: "salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado". Dicha previsión se corresponde con la preocupación manifestada por los países signatarios en su preámbulo de "fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma" (así lo recuerda el TJCE en sentencia de 13-7-93 (TJCE 1993, 119) , núm. C-125/1992) y con la creencia de que es en el Estado de su domicilio donde mejor podrá defenderse el demandado.

El art. 25.1 LOPJ cede ante el Convenio Bruselas. Y los fueros alternativos que dicho precepto establece (lugar de la prestación de servicios, lugar de celebración del contrato y nacionalidad española de ambas partes contratantes) solo son válidos fuera del ámbito material y espacial de dicho Convenio. La sentencia del TJCE de 13-7-00 (TJCE 2000, 172) recuerda (apartado 50) que "el art. 3, párrafo segundo, del Convenio prohíbe al



demandante invocar frente al demandado domiciliado en un Estado contratante las reglas de competencia nacionales basadas principalmente en el domicilio o la residencia del demandante.

De la citada jurisprudencia se desprende, en esencia, que las reglas de competencia internacional vienen configuradas por un sistema de normas que se estructuran en torno a un principio de jerarquía y prioridad, de tal manera que debe aplicarse, en primer término, la normativa internacional y/o de la Unión Europea sobre competencia judicial, y sólo en caso de no ser esto posible, acudir al Derecho interno."

A la llum d'aquesta doctrina, la sentència d'instància, amb criteri que la Sala comparteix plenament, en aplicació del Reglament UE núm. 1215/12, secció 5ena, referida a la competència en matèria de contractes individuals de treball, al seu art. 20.1, en cas demanda contra un empresari, es remet a l'art. 8.1, que disposa que si són diversos els demandats, l'acció es podrà exercir davant de l'òrgan jurisdiccional del domicili de qualsevol d'ells, " *siempre que las demandadas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente*".

Per tant, estant totes les codemandades domiciliades a Barcelona, tret de l'empleadora formal, la competència del jutjat social d'instància resulta incontestable, raó per la qual ha de ser desestimat aquesta denúncia d'infracció normativa, formulada en ambdós recursos.

QUART.- Com a vuitè motiu del recurs de ROSTO, SA, al que s'adhereix GRUPO TRAGALUZ GESTION SL en el quart motiu del seu recurs, i per la via de l' art. 193 c) LRJS, denuncien les recurrents la infracció de la jurisprudència en matèria de grup de empreses.

Comencen les recurrents per denunciar un possible error material que podria haver condicionat la decisió final d'apreciar la concurrència d'un grup patològic.

La Sala ha de descartar el pretès error material: aquest paràgraf (el darrer de la plana 10 de la sentència, que comença amb la referència " *en nuestro caso, el actor prestaba servicios para el Grupo...*"), forma part clarament d'una extensa cita doctrinal, a la que també s'ha reproduït una sèrie d'afirmacions fàctiques que, manifestament, no corresponen a la situació analitzada i sí a la resolta en alguna de les sentències que fonamenten la cita jurisprudencial.

Aclarit això, i per abordar degudament la denúncia, la Sala ha de recordar la doctrina actual del Tribunal Suprem en relació al Grup d'Empreses, recollida a la STS de 20.20.15 en els següents termes:

"Hasta la fecha siempre hemos afirmado que son perfectamente diferenciables el inocuo -a efectos laborales- " grupo de sociedades" y el trascendente -hablamos de responsabilidad- " grupopatológico de empresas ". Sin embargo, el transcurso del tiempo y la progresiva evidencia de un cierto desfase entre la normativa vigente en materia de sociedades mercantiles y la variada realidad ofrecida por el mundo económico en materia de grupos de sociedades [dominicales, contractuales y personales], en muchas ocasiones absolutamente exteriorizadas y aún mantenidas por iniciativa propia en sede judicial por las propias empresas [incluso con oposición de la parte social], nos ha llevado a la conclusión de que la expresión " grupopatológico " ha de ser reservada para los supuestos en que las circunstancias determinantes de la responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno de la ocultación o fraude, pero cuando los datos objetivos que llevan a esa responsabilidad laboral no se ocultan, no responden a una actuación con finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno, la terminología más adecuada más bien debiera ser la de " empresa de grupo " o " empresa - grupo ", que resultaría algo así como el género del que aquél -el grupopatológico- es la especie, cualificada precisamente por los referidos datos de abuso, fraude u ocultación a terceros.

Dicho esto pasemos a referir nuestra vigente doctrina en la materia, expresada en numerosas resoluciones del Pleno de la Sala [SSTS 27/05/13 - rco 78/12-, asunto "Aserpal "; ...; 28/01/14 -rco 16/13-, asunto "Jtekt Corporation "; 04/04/14 -rco 132/13-, asunto "Iberia Exprés "; 21/05/14 -rco 182/13-, asunto "Condesa "; 02/06/14 -rcud 546/13-, asunto "Automoción del Oeste ";...; 22/09/14 -rco 314/13-, asunto "Super Olé "; ...; 24/02/15 -rco 124/14-, asunto "Roto encuadernación "; y 16/07/15 -rco 31/14-, asunto "Iberkake "], que ha ido perfilando los criterios precedentes en orden a la figura de que tratamos y que puede ser resumida -ya que en toda su amplitud ha sido expuesta con cansina reiteración- en las siguientes indicaciones:

a).- *Que son perfectamente diferenciables el inocuo -a efectos laborales- "grupo de sociedades" y la trascendente -hablamos de responsabilidad- "empresa de grupo;*

b).- *Que para la existencia del segundo -empresas/grupo- "no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores,*



sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales", porque "los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son".

c).- Que "la enumeración -en manera alguna acumulativa- de los elementos adicionales que determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo bien pudiera ser la que sigue: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa "aparente"; y 5º) el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores".

d).- Que *"el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad."*

Asimismo, sobre los referidos elementos adicionales son imprescindibles las precisiones -misma doctrina de la Sala- que siguen:

a).- Funcionamiento unitario.- En los supuestos de "prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos ... ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores"; situaciones integrables en el art. 1.2. ET, que califica como empresarios a las "personas físicas y jurídicas" y también a las "comunidades de bienes" que reciban la prestación de servicios de los trabajadores".

b).- Confusión patrimonial.- Este elemento "no hace referencia a la pertenencia del capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso"; y "ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que "no pueda reconstruirse formalmente la separación".

c).- Unidad de caja.- *Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como "promiscuidad en la gestión económica" y que al decir de la jurisprudencia alude a la situación de "permeabilidad operativa y contable", lo que no es identificable con las novedosas situaciones de "cash pooling" entre empresas del mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes.*

d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- *Apunta a la "creación de empresa aparente" -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo", en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que sirve de "pantalla" para aquélla.*

e).- Uso abusivo de la dirección unitaria.- *La legítima dirección unitaria puede ser objeto de abusivo ejercicio -determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.*

En el present cas, la sentència d'instància (segon fonament jurídic, plana 11), en base a la detallada descripció del Grup Tragaluz i de l'entrellat societari que l'integra, que consta al fet provat cinquè, arriba a la conclusió que concorre un funcionament unitari i una direcció unitària a les empreses codemandades (*"en el que los socios, administradores y directores de las diferentes mercantiles demandadas son los mismos y unidos todos ellos por lazos familiares"*), afegint que en els correus electrònics aportats es ressalta la integració del restaurant Laluz de Dubai en el Grup Tragaluz i que *" la propietària es la Sra. Herminia y que se tienen que seguir los mismos criterios de calidad"*.

Afegeix la sentència, a continuació, que considera acreditada la confusió de plantilla, en designar-se com a gerent del nou restaurant de Dubái a AD, assessor gastronòmic del Grup Tragaluz, i que el demandant Felicísimo, *"los meses previos a la apertura del restaurante de Dubai, mientras no les concedían la licencia en EAU, estuvo trabajando en el restaurante Tragaluz, propiedad de Rosto SA, al igual que PM, que era el director de operaciones en Dubai..."*, afegint, a continuació, com altres fets exponent de la confusió de plantilles *" que la plantilla de Dubai se ha formado en Barcelona, en el grupo Tragaluz..."*, *"que las ofertas de trabajo en Dubái ...se hicieron por el Grupo Tragaluz..."*, *"en fecha 13 de mayo se publicó en la página web del Hotel Omm que Laluz es el nuevo restaurante de Dubái del Grupo tragaluz...se trata de un nuevo proyecto del grupo...cuenta con un equipo de 22 personas todas ellas formadas por el Grupo Tragaluz en Barcelona"*, i refereix -a continuació- que idèntica informació consta a la plana web del Grup Tragaluz en data 229.4.16.



Finalment, com element que considera encara més determinant, es fixa la sentència d'instància, en el fet que el contracte de treball fou remès als demandants pel Grup Tragaluz, que fou qui gestionà els visats, els bitllets i els trasllats a Dubàï (i no per part de la societat formal empleadora, "*..firmándose el contrato por los demandantes en Barcelona dado que se remitió antes de su traslado a la Ciudad de Dubái*", afegint encara que "*consta que por el mismo grupotragaluz se les denomina desplazados y se acuerda que aunque no se iran a Dubai hasta el 10 de febrero de 2016 cobrarán su salario desde el 1 de febrero de 2016*". I després de reiterar, un cop més, "*que no puede obviarse que las mercantiles se presentan todas ellas con una identidad unitaria que ofrece una apariencia única bajo el manto del Grupo Tragaluz*", conclou a continuació que ens trobem davant d'un grup laboral d'empreses, cosa que determina l'extensió de responsabilitat a les dues codemandades, que han de respondre solidàriament de les obligacions concretes amb els demandants.

La Sala, a la llum de la doctrina exposada, no pot compartir el criteri de la magistrada d'instància en l'apreciació del grup d'empresa patològica:

- Les circumstàncies de fet conforme "*los socios, administradores y directores de las diferentes mercantiles demandadas son los mismos y unidos todos ellos por lazos familiares*" i que en els correus electrònics aportats es ressalta la integració del restaurant Laluz de Dubai en el Grup Tragaluz i que "*la propietària es la Sra. Herminia y que se tienen que seguir los mismos criterios de calidad*" no poden determinar, per si soles, la concurrència d'un grup patològic, ja que són característiques -també- dels legítims grups econòmics de caràcter familiar.

-La designació com a gerent del nou restaurant de Dubàï a AD, assessor gastronòmic del Grup Tragaluz, i que el demandant Felicísimo, "*los meses previos a la apertura del restaurante de Dubai, mientras no les concedían la licencia en EAU, estuvo trabajando en el restaurante Tragaluz, propiedad de Rosto SA, al igual que PM, que era el director de operaciones en Dubai....*", tampoc són fets que, per si mateixos, determinen aquella apreciació de grup patològic, en correspondre al que la doctrina ha acceptat com a legítima mobilitat interna dins del grup econòmic.

- En contra del que raona la sentència no acrediten una situació de confusió de plantilles les circumstàncies conforme "*la plantilla de Dubai se ha formado en Barcelona, en el grupo Tragaluz...*", "*que las ofertas de trabajo en Dubái ...se hicieron por el Grupo Tragaluz...*", i que "*en fecha 13 de mayo se publicó en la página web del Hotel Omm que Laluz es el nuevo restaurante de Dubái del Grupo tragaluz...se trata de un nuevo proyecto del grupo...cuenta con un equipo de 22 personas todas ellas formadas por el Grupo Tragaluz en Barcelona*", ni que -per tant- s'ha traspasat la frontera entre el legítim grup econòmic i el fraudulent grup patològic, ja que tots aquests fets resulten de la integració en un mateix grup empresarial econòmic, no patològic.

-Sí ho serien, per contra, la prestació indistinta i coetània de serveis per part dels demandants a diverses societats del Grup, cosa que no concorre en el cas del primer demandant, que prestà serveis per ROSTO,SA i després per la societat dubaití (però no coetàniament), ni -encara menys- en el de la segona demandant, que només ha prestat serveis per la societat dubaití, i que no tenia cap vinculació laboral prèvia amb cap altre empresa del grup i que, com recull el primer fet provat, fou contractada "ex novo", com a condició de la seva parella, el primer demandant, per acceptar la mobilitat interna dins del grup.

-Finalment, el fet que "*las mercantiles se presentan todas ellas con una identidad unitaria que ofrece una apariencia única bajo el manto de grupo tragaluz, restaurante Laluz, todos ellos idénticos o similares, denominándose también Tragaluz la Sociedad LLC creada en EAU y firuando el restaurante de Dubai como restaurante de la cadena Tragaluz Restaurants*" tampoc no posa de manifest altra cosa que la imatge unitària que, legítimament, també pot tenir el grup econòmic -no patològic- d'empreses.

A manera de conclusió, no s'ha objectivat cap dels elements "addicionals" que determinen el traspàs de la frontera -certament, a cops tènue- que separa el legítim grup empresarial econòmic del patològic, com tampoc no s'objectivà a la nostra anterior sentència que es pronuncià sobre el mateix grup empresarial, de data 18.12.13 (recurs núm. 4821/2013).

Per tant, escau l'estimació parcial d'ambdós recursos i, amb revocació parcial de la sentència d'instància, absoldre de la condemna a les dues empreses recurrents.

En raó del que s'ha exposat,

DECIDIM

Que hem d'estimar i estimem parcialment els recursos interposats per ROSTO SA i GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN SL contra la sentència dictada pel jutjat del social número 9 dels de Barcelona en data 16.9.19, a les actuacions núm. 317/17, seguides en reclamació de quantitat a instància de Felicísimo i Matilde contra ambdues recurrents i LA LUZ RESTAURANT & CLUB LLC, i, amb revocació parcial de la sentència recorreguda,



es desestima la demanda interposada respecte d'ambdues societats codemandades, ROSTO SA i GRUPO TRAGALUZ GESTIÓN SL, i, per tant, la condemna es manté exclusivament respecte de LA LUZ RESTAURANT & CLUB LLC.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoni atge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social, o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l'article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.

També és possible substituir la consignació en metàl·lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.

Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:

El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de "ordenant" caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a "beneficiari" ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a "observacions o concepte de la transferència" cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el Magistat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.